

## EL CASO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL MERCADO

Ann Zammit  
(*The University of Hull*)

Richard Gott  
(*The Guardian*)

El artículo presenta algunas ideas provisionales que contribuyen a explicar el creciente interés en varios países latinoamericanos, particularmente en Chile, por programas económicos basados en el modelo de la «economía social de mercado». Si bien no faltaron los que se sorprendieron ante la aparición de dicho modelo de política económica, un detenido análisis muestra que tenía posibilidades de contar con la adhesión de regímenes militares que representaban el intento de las burguesías nacionales de reafirmarse en el poder tras ser atacados sus intereses por gobiernos precedentes. Además, las políticas económicas basadas en la «economía social de mercado» recibieron apoyo y estímulo por parte de un ya bien enraizado grupo de intelectuales y, en el caso de Chile, por parte de consejeros extranjeros, bajo cuya tutela proliferaron los intelectuales nacionales que abogaban por el modelo de «economía social de mercado». El artículo suscita algunos problemas y debe ser considerado como el principio de un estudio más serio de este importante fenómeno.

Los golpes militares raras veces se producen inesperadamente en América Latina. Varios días antes, e incluso semanas, la población civil espera pasivamente y casi siempre con resignación mientras las fuerzas armadas efectúan los retoques finales al peor guardado secreto militar del año. Por último, tras un largo período de tensión, rumores e inspiradas filtraciones, la pesada máquina militar se pone en marcha, primero en los centros provinciales, más tarde en la propia capital. El ejemplo más reciente, en Argentina el día 24 de marzo de 1976, fue poco menos que una caricatura de un proceso habitual. El plan detallado del golpe comenzó después de Navidad y a tal extremo fue divulgado que los periodistas eran capaces de revelar el nombre del tema musical —en este caso Tchaikowsky— que los militares tenían intención de radiar entre los escuetos comunicados instando a la población a conservar la calma. También en Chile, en septiembre de 1973, el golpe que derrocó al gobierno de Allende no fue ni con mucho un suceso inesperado. El *tanquetazo* del día 29 de junio fue un aviso de lo que se estaba tramando, y los militares ya se habían hecho con el control de las provincias meridionales —especialmente la ciudad de Temuco— durante los primeros días de septiembre antes de que se apoderasen de Santiago y Valparaíso. En Uruguay, al iniciarse aquel año, en febrero, las fuerzas armadas dieron lógicamente un paso más en el larguísimo y bien dirigido proceso que les había llevado desde los cuarteles hasta la vanguardia del palenque político. Y en Bolivia, en agosto de 1971, la caída del gobierno del general Juan José Torres era esperada y pronosticada por casi todos.

Pero si bien los militares latinoamericanos han conocido considerables dificultades en mantener en secreto sus planes logísticos, en cambio, la naturaleza de sus programas económicos y políticos y su exacta coloración ideológica han constituido con frecuencia un secreto celoso y magistralmente guardado. El día 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas peruanas tomaron el poder en lo que parecía ser una tentativa convencional para impedir una victoria de Apra en las elecciones programa-

das para junio de 1969. Sin embargo, al cabo de una semana los militares ordenaron la expropiación de la filial de la *Standard Oil* de New Jersey y se embarcaron en un programa de reformas radicales y nacionalistas —que incluían la Ley de Bancos, que establecía una participación extranjera en los bancos inferior al 25 %, así como la Ley de Reforma Agraria— demasiado conocidas para ser mencionadas aquí. Baste con decir que los cambios cogieron por sorpresa a casi todo el mundo. El hecho de que un extenso y poderoso sector de las fuerzas armadas peruanas se había adherido a las directrices y opiniones del Partido Demócrata Cristiano no había recibido demasiada atención por parte de la prensa antes del golpe.<sup>1</sup>

De hecho el impacto del golpe peruano en los círculos políticos e intelectuales de América Latina fue tan fuerte que los comentaristas empezaron a descubrir soldados «progresistas» en los lugares más inverosímiles. «La vía militar hacia el socialismo» se convirtió en un concepto absolutamente respetable, adoptado especialmente por ciertos partidos comunistas adictos a Moscú, que ofrecieron su ayuda a generales progresistas nacionalistas en Ecuador, Panamá y Honduras, mucho antes del golpe de abril

1. Los cambios sociales en Perú durante los veinte años que precedieron al golpe militar quedaron reflejados en las tendencias desarrollistas modernizadoras de las fuerzas armadas, y han sido muy bien descritas por Julio Cotler en su trabajo «Crisis política y populismo militar», en el libro colectivo *Perú hoy* (México: Siglo XXI, 1971). Señala el autor:

«El cambio operado en las fuerzas armadas entre el cuartelazo de 1968 y el golpe institucional de 1968, se inserta dentro de las transformaciones sociales que el país ha experimentado en ese lapso. Estas transformaciones han modificado el cuadro de las relaciones sociales y de poder, diversificándolas y desatando nuevas fuerzas imposibles de controlar bajo la mecánica tradicional. Ellas arrancan fundamentalmente del proceso de urbanización iniciado entonces, que produjo el desquiciamiento de la sociedad rural tradicional y de sus grupos dominantes, con la consiguiente pérdida de las bases políticas de la «oligarquía». De esta manera se haría patente una crisis de hegemonía política, con la consiguiente falta de legitimidad del sistema en su totalidad. Asociados a estos cambios sociales ocurridos en el país, las orientaciones ideológicas y normativas de la oficialidad se vieron «modernizados», bajo un tinte desarrollista, animadas por el sector y la visión técnico-profesional y por los cambios propiciados por las fuerzas armadas norteamericanas en relación con el papel neutralizador que debe cumplir la institución castrense de los países subdesarrollados ante los procesos de movilización política y de insurgencia popular. De esta suerte, los militares se constituyeron en el único factor capaz de controlar políticamente la situación y de procurar, a través de una reestructuración de la sociedad, recomponer a un nuevo nivel el sistema de dominación. Para ello, dos son los ejes sobre los que se mueve este régimen militar: la modernización del sistema capitalista por intermedio de la manipulación tecnocrática y la neutralización de la movilización política, que permitirían una relegitimación del sistema social en su integridad.» (Pp. 88-89.)

de 1974 en Portugal, que dio renovada credibilidad a la idea. Incluso en el Chile de Allende se nutrieron varias ilusiones acerca de los «militares progresistas», basadas sobre todo en el mito, tan generalmente aceptado, de la neutralidad, pasividad y carácter pacífico de las fuerzas armadas y al que acordaba auténtico respaldo la figura del comandante en jefe «constitucionalista», el general Carlos Prats. Durante las semanas que precedieron al golpe se hablaba del peligro de un «golpe fascista», pero en verdad pocas personas creían realmente en la inminencia de una ruptura constitucional susceptible de aplastar la democracia chilena durante una generación. Lo mismo ocurrió en Uruguay, en donde la mayor parte de la izquierda se equivocó gravemente al juzgar la relación de fuerzas en el seno de las fuerzas armadas. Varios meses después de febrero de 1973, aún se creía en la posibilidad de que los «nacionalistas progresistas» empezasen a dominar. Si bien había muy pocas ilusiones respecto a la naturaleza del golpe del coronel Hugo Banzer en Bolivia en agosto de 1971 —que estaba claramente inserto en los deseos y ambiciones de la oligarquía *cruzeña*— la participación en el gobierno Banzer de Víctor Paz Estensoro, viejo caudillo del MNR, constituyó una verdadera sorpresa.

El propósito de esta introducción consiste en subrayar la evidente imprevisibilidad del matiz político de los golpes militares que han afectado a América Latina durante la pasada década. Naturalmente, si miramos retrospectivamente, todo parece encajar. El golpe en Argentina parece completar el rompecabezas, en la concerniente al *cono sur*. Toda América Latina, a excepción de Colombia, Venezuela y las Guayanas, se halla en la actualidad bajo control militar. Los historiadores del futuro que investiguen el siglo xx se darán cuenta de que en la década de los setenta, así como en la década de los treinta, los militares tomaron el poder en América del Sur con el fin de hacer frente a una situación derivada de la aplicación de pasadas políticas económicas y exacerbadas, por no decir creadas, por la recesión del sistema capitalista internacional, que tal vez ha producido resultados más desastrosos en la periferia que en las metrópolis. Ahora la situación parece clara, pero en aquellos momentos esta claridad brillaba por su ausencia, ante todo a causa de un insuficiente análisis de las fuerzas sociales, económicas y políticas que se manifestaban en cada país y en el más amplio escenario internacional. En Chile, por ejemplo, aunque se dedicó considerable tiempo y esfuerzo durante los años de la Unidad Popular a la discusión y examen de lo que se describía como «la realidad nacional», el debate únicamente giró en torno a cuestiones tales como el campesinado, los obreros de la industria, las mujeres, y el estado de la economía. Un año después del golpe, varios intelectuales chilenos declararon que el país había cambiado hasta el punto de que

ellos ya no lo reconocían. Así es, se había hecho irreconocible, pero para un observador imparcial es obvio que el general Pinochet y sus hombres representan igualmente una importante parcela de «la realidad chilena», una realidad cuyo peligro fue ignorado por la mayor parte tanto de políticos como de intelectuales.

De hecho, la aparición de dichos soldados «neanderthalenses» desde los más profundos y en su mayor parte desconocidos albores de la experiencia histórica de Chile, constituyó una sorpresa, pero quizás fue una sorpresa aún mayor para muchos la decisión de embarcarse en una política económica de desenfundada libertad de empresa, denominada «economía social de mercado». Después de todo Chile, ya en 1939, había promovido la creación del Corfo —la entidad que pretendía fomentar la participación estatal en la economía—, y fue asimismo durante 25 años la sede de la CEPAL, organismo dependiente de las Naciones Unidas cuyas teorías de planificación y desarrollo inspiradas en la intervención del Estado se habían convertido en ortodoxia en casi todo el Continente. Todo eso fue barrido repentinamente, y los militares adoptaron sin mitamientos una dirección completamente distinta ante la consternación de varias personalidades políticas (tales como Orlando Saenz o Eduardo Frei) que podían haber sido sus aliadas.

La doctrina de la economía social de mercado en su definición inicial aboga por la sustitución de los programas gubernamentales intervencionistas por políticas económicas denominadas «responsables» que actúan con y a través del mercado para alcanzar objetivos sociales más amplios. La economía de mercado social se opone a los conceptos colectivistas de centralización y de socialismo de Estado (término que se emplea para designar el sistema de propiedad pública y servicios sociales característico en países capitalistas tales como Gran Bretaña y Francia).

El apuntalamiento ideológico capitalista de la economía social de mercado es evidente. La libertad de poseer propiedades y de dedicarse a la producción de bienes y servicios se considera como una finalidad válida de por sí. Se considera asimismo como condición esencial para las demás libertades: libertad de elección de educación, sanidad, vivienda, trabajo, ahorro, medios de comunicación, información y, desde luego, libertad política. La doctrina de la economía de mercado cree que entre todos los demás sistemas es el que proporciona el campo de aplicación más adecuado para el desarrollo material, social y cultural en condiciones de libertad. En realidad, intérpretes británicos de la doctrina de la economía social de mercado la catalogaron recientemente de «capitalismo competitivo» basada en la inocente creencia de que una mayor confianza en los mecanis-

mos de mercado dispersaría el poder económico por toda la sociedad, confinando al Estado a actuar como árbitro.

Trazar los orígenes y los éxitos de la economía social de mercado como rama de la política económica sería más fácil si Chile fuese el único caso. Pero lo cierto es que la denominada economía social de mercado, que cuenta con la lealtad de la Junta chilena, tiene varios admiradores en el cono sur, especialmente en Uruguay (si bien trasciende las intenciones de este artículo, es interesante notar que en la actualidad constituye la nueva ortodoxia del derecho británico). Uruguay, al igual que Chile, ha tenido una larga tradición de intervención estatal en la economía, y el actual gobierno dominado por los militares del presidente Juan María Bordaberry está desmantelando el sector público con el mismo entusiasmo que se observa en Chile. Evidentemente Chile y Uruguay tienen mucho en común, y en ello tiene algo que ver un pasado común como enclaves del imperialismo británico. No cabe la menor duda de que ni Chile ni Uruguay tendrían su actual dimensión y forma si no hubiese sido por las maquinaciones de los británicos. Y las similitudes no terminan aquí. Las clases dominantes de Chile y de Uruguay siempre han recalcado la «blancura» de sus países, identificándose explícita e intencionadamente con la tradición conquistadora europea más bien que con cualquier tipo de tradición indígena o autóctona, y siempre han preferido identificarse con el componente anglosajón (y ocasionalmente con el suizo) de su herencia, más bien que con el de los países mediterráneos, cuya identificación es más popular en el resto de América Latina. La creencia general de que Chile y Uruguay no eran «completamente iguales al resto de América Latina» también fue adoptada por la izquierda. Fidel Castro y Che Guevara, al pasar revista a los países latinoamericanos preparados para la revolución y la guerra de guerrillas en la década de los sesenta, se cuidaban siempre de excluir a Chile y Uruguay. De ese modo cuando estos dos países cayeron bajo control militar en 1973, y surgió el hasta aquel momento menospreciado o minimizado aspecto «latinoamericano» de su «realidad nacional», no podía sorprender a nadie que hubiesen decidido seguir el mismo camino.

¿Pero qué razón tenían ambos para escoger la economía social de mercado como vehículo para las aspiraciones y ambiciones militares? ¿Hemos de buscar sus causas en las estructuras sociales internas de cada país o en las relaciones entre aquellas estructuras y el imperialismo dominante de nuestros días? Ya que, a pesar de sus demás atributos, no hay duda de que la «economía social de mercado» es un concepto ideado en y para la República Federal Alemana, aunque el concepto se ha asociado a menudo con la Escuela de Economía de Chicago, y en particular con las personas

de Milton Friedman y de Arnold Harberger. Parece ser que el primero en definirlo fue un profesor alemán (A. Muller-Armack) y fue publicado y popularizado seguidamente por el doctor Ludwig Erhard, padre del «milagro económico» alemán. El propio Erhard visitó América del Sur en los años sesenta y su libro fue traducido al español en Argentina, siendo muy elogiado por Alvaro Alsogaray, uno de los cerebros económicos del equipo del régimen militar del general Juan Carlos Onganía.

Lo que a primera vista parece sorprendente es que estas ideas hayan enraizado en Santiago y en Montevideo. En los años sesenta eran casi rechazadas de plano en ambas ciudades, tanto por las universidades como por el gobierno. En el caso de Chile, las políticas monetarias ortodoxas, la fiscalidad restrictiva y el «libre» comercio se habían desacreditado en el transcurso de la experiencia del esfuerzo estabilizador efectuado entre 1955 y 1962. Desde 1955 hasta 1958 se aplicó una política económica deflacionista bajo el asesoramiento y supervisión de Klein Sachs que trató de desbaratar los principales mecanismos que propagaban la inflación. Fueron impuestas severas congelaciones salariales y restricciones crediticias, combinadas con una fuerte reducción de los gastos públicos con la finalidad de equilibrar el presupuesto. El índice de inflación disminuyó pero ello fue en detrimento del crecimiento y del nivel de empleo. Entre los años 1959 y 1962 se aplicó una política económica más expansionista, que giró en torno a un régimen de importaciones más liberal, con la evidente doble ventaja de estimular la competencia e incrementar la productividad y la de facilitar el equilibrio presupuestario (se suponía que los ingresos del gobierno en moneda nacional aumentarían por la transferencia de créditos extranjeros a través de las autoridades fiscales y monetarias). El coste de estimular la economía de esta manera, en una situación en que las exportaciones difícilmente podían aumentar, fue un fuerte endeudamiento exterior.

El sucesor de este período —el gobierno demócrata-cristiano de 1964 a 1970— parecía creer más firmemente que cualquiera de sus predecesores en las políticas económicas intervencionistas con el fin de promover el desarrollo socio-económico. También en este período la planificación del desarrollo nacional y regional pasó a ser un concepto más matizado, si bien hay que decir que el nuevo organismo —ODEPLAN— creado con este propósito, demostró ser una institución mutilada, dependiente de la Presidencia, incapaz de idear un plan de conjunto y ni siquiera de llevarlo a cabo.

Sin embargo, es preciso recordar que en la década de los cincuenta se fundó una facultad de económicas en la Universidad Católica de Chile, patrocinada por la Universidad de Chicago y financiada por la Fundación

Rockefeller. Gracias a eso se estableció una corriente de estudiantes de la Universidad Católica de Chile, de derechas y bastión de la burguesía, al Departamento de Económicas de Chicago, con objeto de versarse en mejores condiciones en las virtudes de la economía de mercado libre y de convertirse en los tecnócratas que se supone necesita un país en desarrollo. Ello dio lugar a que muchos profesores, incluido Harberger, iniciasen un flujo de idas y venidas a Chile.

En Chile se creó el contexto adecuado para que pudiesen brotar las semillas de la economía de mercado libre. Posteriormente, la CIA pudo construir sobre los cimientos colocados por la Fundación Rockefeller. En el informe titulado «Actuación secreta en Chile 1963-1973», preparado el pasado diciembre de 1975 por los miembros del «comité escogido para el estudio de las operaciones gubernamentales en lo referente a las actividades de espionaje» del Senado de los Estados Unidos, los autores escriben en la página 40 que uno de los objetivos de la «actuación Secreta» después del golpe de septiembre de 1973 «era ayudar al nuevo gobierno a organizar y aplicar nuevas políticas económicas». Existen pruebas de archivo de que los colaboradores de la CIA tomaron parte en la preparación de un plan económico de conjunto que sirvió de base a las decisiones económicas más importantes de la Junta. Este objetivo fue «alcanzado en parte gracias al trabajo efectuado en la organización de la investigación de la oposición antes del golpe», organización que la CIA «financió de modo creciente, más del 75 % en 1973».

Un análisis más detenido de la economía social de mercado —la marca europea y la economía de libre mercado, la híbrida norteamericana— revelaría si existen diferencias esenciales en la teoría o en la práctica. La primera impresión es que la economía de libre mercado es un híbrido más represivo. Si bien los partidarios de la economía social de mercado abogan por una mayor utilización del mercado, no proponen el *laissez-faire* total. A nivel teórico la economía de mercado social reconoce que los programas y servicios sociales son necesarios en bien de los «desfavorecidos» y de los que se han visto afectados negativamente por las reconocidas deficiencias de los mecanismos de mercado. Es difícil decir cómo funcionarían en la práctica estas redes de seguridad social, sobre todo si, como se pretende, cambiase la forma de intervención gubernamental que proporciona dichos servicios.

La economía híbrida de libre mercado, en la forma explícitamente preconizada por Milton Friedman y Arnold Harberger y adoptada en Chile, ya irrumpe sustancialmente en estos aspectos del bienestar social. Además de una drástica reducción del ya bajo nivel de vida de la mayor parte de la población, resultante de combinar el control salarial y la libertad de precios



y desempleo, la Junta ha dispuesto rebajar gradualmente los elementos del nivel de vida no sujetos a transacción comercial. La drástica reducción de los gastos públicos, recomendada encarecidamente por Friedman y Harberger, no se limita a reducir la desmesurada democracia administrativa o a deslastrar las actividades productivas en el sector privado, sino que se extiende a los servicios sociales, médicos y demás. El programa oficial, de conformidad con explícito asesoramiento exterior, dispone que la sanidad y la educación deben ser transferidas gradualmente al mercado libre, en el que dichos «servicios» serán adquiridos y organizados en mayor escala sobre la base de la autofinanciación.

Dichos programas son recomendados al objeto de alcanzar un redibujado equilibrio y normalidad que, a pesar de una inflación anual de 400-600 %, un desempleo de 20-30 %, niveles de vida drásticamente reducidos, pobreza masiva y desnutrición, disminución de la producción industrial, sigue estando casi a la vuelta de la esquina ¡a condición de que estos programas sean aplicados con un poco más de firmeza durante algún tiempo más...!

Incluso si se acepta, como se debe hacer, que las semillas de la nueva política económica de la Junta fueron traídas del exterior —y regadas y abonadas con asistencia exterior— no es, sin embargo, menos cierto que fueron bien recibidas en algunos círculos de dentro del país. En primer lugar están los economistas que, expertos en economía neoclásica, economía de mercado y técnicas econométricas, se suelen considerar tecnócratas neutrales. Critican duramente a los de su profesión que predicán o practican la «economía política»: la economía y la política están separadas y los costes sociales quedan al margen. Algunos de ellos son funcionarios internacionales «desnacionalizados» —hombres como Jorge Cauas en Chile y Alejandro Vegh Villegas en Uruguay— hombres que no son leales al país del que proceden sino al conglomerado de ideas y programas que emanan de las instituciones capitalistas internacionales para las que han trabajado principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Si es que estos tecnócratas «desnacionalizados» representan a alguien, representan a la burguesía nacional que a lo largo del tiempo ha sido sustituida o dominada por el capital extranjero y que ha sido incorporada en el sistema capitalista internacional, asimilando sus valores y adoptando para sí sus intereses. Raul Sahli, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, en una entrevista realizada por la revista «¿Qué Pasa?» en 1975 declaró: «Nosotros los industriales estamos a favor de la política de mercado social. Hemos estado pidiendo durante cincuenta años una economía libre. Y esto es lo que está llevando a cabo este gobierno al decretar en primer lugar la

libertad de precios, que todos aplaudimos, y acto seguido la competencia libre, indispensable para que un sistema de libertad de precios pueda operar eficazmente.» «Consideramos que en un pequeño país como Chile la competencia debe proceder del exterior [...] Únicamente con monopolios podemos competir en los mercados extranjeros. Dentro del país no podrán operar como tales, ya que también tendrán que soportar la competencia de los productos importados.» «Ercilla», otra revista chilena, da cuenta de la siguiente declaración de Shali: «Lo peor es que ni los hombres de negocios ni los consumidores se han adaptado a la nueva realidad. Sólo se trata de un problema de mentalidad.»<sup>2</sup> En este sentido ya señaló Richard Ratchiff en su trabajo «Capitalistas en crisis: la clase alta chilena y el golpe del 11 de septiembre»,<sup>3</sup> que «una de las ironías de la historia de Chile es que los dirigentes de la clase alta actual, que claramente afirman ser los defensores del capitalismo chileno contra el socialismo y dicen estar promoviendo el desarrollo nacional, representan en realidad las reminiscencias letárgicas de la que en un tiempo fue dinámica clase capitalista, que fue posteriormente desbancada por la creciente penetración en Chile de los capitalistas extranjeros. Desde que la clase alta chilena se rindió a la dominación extranjera ha sido incapaz de dirigir o de controlar eficazmente el desarrollo económico de Chile». Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que esta misma clase alta aceptase el asesoramiento y la tutela extranjera en cuanto a la formulación de su política económica.

Otro grupo bien dispuesto a aceptar las ideas de la economía social de mercado es el de los ideólogos de inspiración fascista de la Junta Militar, tales como Jaime Guzmán (miembro de Patria y Libertad y catedrático de la Universidad Católica). Naturalmente, dicho grupo apoya la imposición forzosa de los programas de economía social de mercado que socavan la posición económica y fortaleza política de los obreros de la ciudad, de los campesinos y trabajadores rurales y devuelven el capital y la propiedad a sus «verdaderos dueños».

Lo que aún sigue siendo en parte un enigma es la razón por la cual las fuerzas armadas —que tradicionalmente se consideran depositarias de las virtudes nacionales— se han adherido a estos programas promovidos y orientados por el extranjero. A este respecto parece haber una doble explicación. En primer lugar, los más altos escalafones de las fuerzas armadas comparten el mismo tipo de mundo tecnocrático imperialista que el de los economistas tecnócratas. Al haber sido formados en el extranjero, par-

2. Citado por André Gunder Frank en «An Open Letter about Chile», *Bulletin of the Conference of Socialist Economists*, vol. IX, núm. 3 (octubre de 1975).

3. *Latin American Perspectives*, vol. 1, núm. 3.

ticipado en maniobras conjuntas a nivel del hemisferio y ser dependientes del equipamiento exterior, absorben rápidamente el mismo tipo de mitos acerca del mundo. En segundo lugar, como institución, son probablemente más conscientes del pasado que cualquier otra institución comparable del Estado. Varios oficiales superiores del Ejército tanto en Chile como en Uruguay, conocen tan bien el siglo XIX como el siglo XX y recuerdan aquella época con auténtica nostalgia. Y desde luego lo que imperaba en aquel período era el *laissez-faire* y el libremercado. Posiblemente durante aquella edad dorada que los militares auscultan, los contactos con el mundo exterior no eran tan perjudiciales para el inmediato desarrollo del país, y desde luego no tan perjudiciales para la clase que ellos representan. Pero prescribir las mismas políticas económicas para efectuar la cura que dichos oficiales creen, en circunstancias completamente distintas, parece ser necesariamente una receta para el desastre.

Cualesquiera que sean las verdaderas razones que han movido a los militares a adherirse a la doctrina de la economía social de mercado, no hay duda de que la burguesía y en particular la clase empresarial consideran la toma del poder por la Junta como la oportunidad largo tiempo esperada para enderezar su posición y regresar al *statu quo* de antes de 1970, neutralizando el avance hacia el Estado y el poder obrero de la incipiente carrera socialista. De hecho, Raul Sahli, presidente del SOFOFA, se equivocó al afirmar que los industriales habían estado pidiendo una economía libre durante cincuenta años. Las clases medias chilenas y los grupos empresariales estaban más que dispuestos a aceptar la intervención del Estado bajo variadas formas en épocas anteriores, cuando el contexto político y los métodos empleados garantizaban que dicha intervención se haría en beneficio suyo. De ahí su significativo apoyo al Partido Demócrata Cristiano. Ahora que la economía social de mercado ha sido aplicada con todo rigor por la autoridad represiva de la Junta, una gran parte de la burguesía ha empezado a dudar si esta drástica línea de acción va a redundar, a corto o siquiera a largo plazo, en beneficio suyo.

ANN ZAMMIT

Department of Economic and Social History  
The University, Hull, HU8 7RX  
Inglaterra

RICHARD GOTT

«The Guardian», 119 Farrington Road  
Londres EC1R 3ER  
Inglaterra